

REVISTA CIDOB d'AFERS INTERNACIONALS 79-80.

La política árabe y mediterránea de España.

El Partido Popular y la política de España hacia el Magreb.
Irene Fernández Molina.

El Partido Popular y la política de España hacia el Magreb

Irene Fernández Molina*

RESUMEN

Como actor de la política exterior española hacia el Magreb, el Partido Popular no disponía, en los años posteriores a su fundación, de un modelo propio bien perfilado, por lo que asumió las líneas maestras del enfoque socialista y el discurso sobre la promoción del desarrollo económico y la estabilidad de la región. El continuismo inicial del Gobierno de José María Aznar en este ámbito respondió también a un pragmatismo de inspiración economicista. La inflexión fundamental tuvo lugar en el tramo final de su segunda legislatura, debido a las repercusiones internacionales de los atentados del 11-S, la crisis con Marruecos y la acentuación de la presidencialización e ideologización de la política exterior. Tras su paso a la oposición, tanto en el partido como en su entorno, se aprecia cierta bifurcación entre los discursos de un sector eminentemente realista y otro más influido por el neoconservadurismo estadounidense.

Palabras clave: España, Magreb, política exterior, Marruecos, partidos políticos

Ni iniciativa popular ni verdadero control parlamentario. La política exterior de la España democrática ha sido hasta nuestros días patrimonio del Ejecutivo. De ahí que los partidos políticos, únicos intermediarios legitimados entre la sociedad civil y el Estado en

*Investigadora Predoctoral. Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales), Universidad Complutense de Madrid
irenefmolina@hotmail.com

Este artículo se enmarca en los resultados de la investigación del proyecto I+D+i "Política exterior y relaciones culturales con el mundo árabe" (SEJ2005-08867-C03-03) financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

este terreno, deban contarse entre sus actores fundamentales. En este sentido, el Partido Popular (PP), protagonista de la vida política del país durante las dos legislaturas consecutivas en que José María Aznar presidió el Gobierno (1996-2000 y 2000-2004) y única formación que actualmente puede aspirar a relevar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Moncloa, merece ser analizado como actor de la política española hacia el Magreb. Más allá de la acción de gobierno del PP en este ámbito, que ya ha sido estudiada por distintos autores (Gillespie, 2000; Núñez Villaverde, 2001; Feliu, 2005; Hernando de Larramendi, 2006), este artículo examina la evolución de su percepción de la región, su jerarquía de prioridades y las fuentes de las que bebe desde la *refundación* del partido en 1989 hasta su actual papel de oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En relación con esta región, en la que se concentran casi todos los intereses específicos de España en el Mediterráneo y se puede apreciar un modelo de acción más independiente y perfilado (Núñez Villaverde, 2001: 132, 137), una de las preguntas claves es si, en cada momento, el PP ha apostado preferentemente por la llamada estrategia de equilibrio o de compensación, heredada del tardofranquismo y los gobiernos de la Unión del Centro Democrático (UCD), o por la estrategia global concebida a partir de 1982 por los gobiernos del PSOE para superar las disfunciones de aquella (Gillespie, 2000: 30-34; Hernando de Larramendi y Núñez Villaverde, 1996: 59-65). El primer enfoque pretendía fomentar las buenas relaciones de España con los dos estados magrebíes con veleidades hegemónicas, es decir, Marruecos y Argelia, pero no renunciaba a explotar la rivalidad entre ambos en aras de la defensa de los intereses territoriales españoles (Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla) (López García y Hernando de Larramendi, 2002: 170). Esta lógica obligaba a compensar a uno de estos países cada vez que se tomaba una medida favorable al otro, lo que no hizo sino incrementar la inestabilidad de sendas relaciones bilaterales y las respectivas presiones sobre Madrid. Para conservar simultáneamente la amistad de Rabat y Argel sin recurrir a gestos compensatorios, rompiendo con el juego de suma cero, la receta alternativa era la promoción de la integración regional, el desarrollo y la estabilidad de la zona. De la misma confianza en las virtudes de la interdependencia (Gillespie, 2006: 120-121), pero con Marruecos como destinatario, nacía la doctrina del *colchón de intereses*, según la cual la creación de una red de intereses comunes, a base de diálogo político institucionalizado y cooperación, amortiguaría la conflictividad cíclica de las relaciones bilaterales ligada a las disputas territoriales.

A la hora de ponderar la influencia del PP sobre la acción de los gobiernos de Aznar, hay que tener presente tanto la tendencia general a la presidencialización de la política exterior española, como la inusitada disciplina impuesta en el seno de esta formación desde su creación y acentuada durante sus años de gobierno, por encima de las diferencias entre familias ideológicas (democristianos, liberales, neoconservadores). Algunos analistas lo han descrito como “un partido centralizado, presidencialista, que concentra todos los recursos del partido en las manos del liderazgo y otorga al líder del partido una extraordinaria

panoplia de poderes” (Balfour, 2005: 149). Las etapas en las que se rastrearán sus distintas percepciones y orientaciones sobre la política de España hacia el Magreb son cuatro: el período que va desde la creación del partido hasta su llegada al Gobierno (1989-1996); sus primeros seis años en el poder (1996-2002); el tramo final de su segunda legislatura (2002-2004); y su regreso a la oposición tras la victoria electoral del PSOE (2004-2007).

AÑOS DE APRENDIZAJE

Herederos de la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, el PP actual nació en el llamado Congreso de Refundación, en enero de 1989, bajo el impulso de Aznar y su entorno y con la vocación de convertirse en una formación centrista, liberal y moderada homologable con las de la gran familia democristiana europea (Balfour, 2005: 146-150; Woodworth, 2004). En política exterior, la falta de una tradición de pensamiento consolidada (Gillespie, 2001: 33; Aixalà i Blanch, 2005: 100) y la escasez de especialistas de que adolecía y sigue adoleciendo la clase política española (Gillespie, 2000: 35) eran especialmente acusadas en el caso de la derecha posfranquista. En sus primeros años, el PP no disponía de un acervo propio del que echar mano a la hora de perfilar sus posiciones en esta materia. Como señala Juan Carlos Jiménez Redondo, “la hegemonía continuada del Partido Socialista en el poder con tres mayorías absolutas desde 1982 y, lo que es más importante, la ausencia de una alternativa real de gobierno hasta los primeros años noventa, explica la falta de consolidación de un modelo de política exterior alternativo al socialista” (2005: 26). Por todos estos motivos, no debe extrañar que, al menos en su primera década de vida, el PP asumiera como propias las líneas maestras de la política exterior de Felipe González, tanto en su diseño general como en el enfoque específico de la región mediterránea.

En medio de la inevitable confrontación partidista, esta opción quedó consignada como una apuesta por el consenso y la política de Estado. Las bases de la política exterior española, según este partido, habrían sido sentadas antes de la llegada del PSOE al poder por los gobiernos de la UCD; no en vano, Aznar trataba a principios de los años noventa de apropiarse de esta herencia para consolidar la imagen centrista de su partido (Balfour, 2005: 150). Así, en el apartado correspondiente del programa electoral de 1993 –y, con idénticas palabras, en el de 1996– se afirmaba que “el mayor mérito de la política exterior de los gobiernos socialistas ha radicado en la adopción de planteamientos que originariamente no eran suyos”.

A principios de los noventa, y a consecuencia de todo lo anterior, las referencias al Magreb por parte de responsables del PP no eran más que ocasionales y dispersas, y no permitían perfilar un modelo propio. Por ejemplo, en un seminario organizado en

diciembre de 1990 por la Fundación Cánovas del Castillo, el propio Aznar defendía posiciones apenas distinguibles de las del Gobierno socialista del momento: la construcción de un “proceso de mutuo entendimiento” y un marco de relaciones estable entre Europa y los países del Mediterráneo (Aznar, 1992: 90), así como el respaldo económico y político a la consolidación de la Unión del Magreb Árabe (UMA), recién creada por el tratado de Marraquech en febrero de 1989. “En la época colonial, Europa trataba de dividir (...), pero es evidente que ahora hace falta facilitar la creación de esas agrupaciones regionales que, con la unión de varias naciones, articulen organismos colectivos con entidad suficiente para convertirse en los equilibrios interlocutores de la Comunidad Económica Europea o de las entidades multinacionales (...)” (Aznar, 1992: 100).

El centro del interés del presidente del PP, no obstante, era ya “los problemas de la gigantesca emigración, de la dependencia económica y comercial y las insoslayables cuestiones de seguridad” (Aznar 1992: 90), así como la incidencia en el Magreb del “decenio islámico” (1980-1990), convertida en portada de la prensa internacional tras la victoria del Frente Islámico de Salvación (FIS) en las elecciones municipales argelinas de 1990 (1992: 98). De su análisis de este último fenómeno llama la atención la defensa de un enfoque cauto y pragmático que no tome al pie de la letra toda la retórica islamista: “Convendría que el análisis europeo de la antología fundamentalista fuese capaz de comprender la diferencia que puede haber entre la predicación de un exaltado y las limitaciones que impone el ejercicio del poder” (1992: 93-94). Quizá como profano en la cuestión, Aznar se sorprendía de los dobles raseros existentes en la percepción occidental de la evolución de distintos países: “Resulta claramente contradictorio que el terremoto político del FIS argelino provoque desde ahora tantas alarmas cuando su fuente inspiradora, es decir Arabia Saudí, se considera país amigo” (1992: 95). Por lo demás, no era ajeno a la revalorización del papel de Marruecos para España y la Unión Europea (UE) provocada por la crisis argelina y destacaba a dicho país como el “más estable y organizado” de la región, una “realidad política establecida bajo reglas que, en comparación a los módulos continentales, pueden considerarse como largamente superiores”, y donde los “brotos fundamentalistas” tenían “escaso impacto” (1992: 97).

Mucho más alarmista era el diagnóstico sobre el nuevo entorno estratégico español y europeo que por los mismos años realizaba Rafael L. Bardají, analista que desde 1989 contribuía a la reflexión del PP sobre asuntos internacionales desde el Grupo de Estudios Estratégicos (GEES) (Bardají, 2007a: 11). Según él, tras el fin de la Guerra Fría, las amenazas de los países de la orilla sur del Mediterráneo provendrían tanto de la proliferación nuclear como de “la inestabilidad social producto de su demografía galopante, subdesarrollo y fundamentalismo religioso” (Bardají, 1992). En definitiva, pese a las diferencias de matiz, el PP de esta etapa percibía esta región esencialmente como una fuente de riesgos y amenazas desde el punto de vista de la seguridad. Pero la magra respuesta ofrecida por su programa electoral de 1993 no se despegaba apenas del ya

asentado discurso socialista sobre la promoción del desarrollo económico y la estabilidad de la región como antídotos contra su potencial conflictividad: “Al sur del Mediterráneo, en nuestra inmediata vecindad, los países del Magreb –zona de conflictividad potencial extraordinaria– serán objeto de una atención preferente a favor de su prosperidad económica y de su estabilidad. Se realizarán esfuerzos especiales de cooperación con el Magreb tanto en el plano bilateral como en el plano de la Comunidad Europea. Y se mantendrán las mismas relaciones amistosas con todos los países de la zona”.

CONTINUIDAD DESVAÍDA

En 1996, el PP accedía al Gobierno tras una ajustada mayoría en las elecciones generales con un programa continuista en muchos aspectos (Balfour, 2005: 153), entre los que se encontraba la política exterior. Por entonces, Aznar reafirmaba su visión de la política exterior como un asunto de Estado sobre el que en España se había alcanzado un considerable consenso: “Ha habido un amplio acuerdo que nos ha permitido ajustar la acción exterior a nuestras capacidades como potencia media. No practicamos políticas irredentistas o aventureras. Evitamos la retórica y la confrontación. Utilizamos el derecho internacional y los instrumentos de conciliación (...)” (1996: 11-12). De acuerdo con estas palabras, la suya era una concepción de la política exterior esencialmente realista y pragmática. Eso sí, a decir del diplomático democristiano y ex miembro de la UCD Javier Rupérez (1996), una de las figuras más influyentes en la visión internacional del partido en este momento, la apuesta por la permanencia y la previsibilidad no excluía la existencia de “matices y acentos” propios. Entre ellos destacaba el giro economicista de la política exterior y la prioridad de la diplomacia económica (Valencia, 2000: 311); el énfasis renovado en las relaciones bilaterales; una defensa más firme de los intereses nacionales en la UE; la ampliación de las relaciones con la región de Asia-Pacífico; y la promoción cultural y lingüística en el extranjero (programa de 1996; Aznar, 1996).

Dentro de la agenda mediterránea, el PP recién llegado al Gobierno mantuvo el discurso acostumbrado sobre la primacía de la estabilidad (Aznar, 1996: 21), sin anunciar de entrada ningún cambio de matiz con respecto a la estrategia del PSOE (Rupérez, 1996) y adhiriéndose expresamente a la “política global” (programa de 1996). Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se aseguraba que “la finalidad de España en el Magreb es la de tener una red de intereses comunes que coadyuven a la estabilidad y a la previsión de nuestras relaciones”. “Nos conviene la estabilidad en la región y por ello los proyectos de integración, como la UMA (...), son interesantes para nosotros” (Ferré, 2000: 84). Según el propio orden del programa electoral de 1996, los objetivos prioritarios serían la

estabilidad y prosperidad económica de los países del Magreb, una política de inmigración adaptada a las exigencias del Acuerdo de Schengen (la inmigración ganaba atención respecto a 1993); la promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales, y los procesos de reforma política; la atención al auge del *fundamentalismo islámico*; así como la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. En cualquier caso, el vértice de este diseño era la liberalización económica de la región, considerada como receta infalible para su desarrollo y, por ende, su estabilidad (Ferré, 2000: 101, 78, 90).

Al mismo tiempo, en estos años ganaban peso en la agenda las cuestiones ligadas a la seguridad y la percepción del Mediterráneo como una región “extremadamente volátil” (Aristegui, 2000: 184), que “tiene todos los gérmenes de conflictos potenciales”: proliferación de armamento, ausencia de una estructura de seguridad, conflictos de fronteras y soberanía (Ferré, 2000: 77). En relación con el *fundamentalismo islámico*, aunque el programa electoral recomendara “huir de fórmulas simplistas de rechazo generalizado de estos movimientos y encontrar cauces imaginativos de relación y diálogo con sus manifestaciones moderadas”, algunos representantes del partido como el diplomático Gustavo de Aristegui establecían un vínculo directo entre ideología y terrorismo (2000: 185).

En la política bilateral hacia el Magreb, esta agenda se concretó en los siguientes términos: la continuidad de las relaciones con Marruecos, visible en la elección de este país como destino del primer viaje oficial al extranjero de Aznar tras la toma de posesión de su cargo (mayo de 1996) y el decidido apoyo a Mohamed VI tras su ascensión al trono en 1999 (Cembrero, 2006: 13-14); el progresivo acercamiento a Argelia a medida que disminuía el nivel de violencia interna; y el apoyo a la reinserción de Libia en la comunidad internacional tras el inicio de las negociaciones para la resolución del caso Lockerbie y la suspensión temporal, en 1999, de las sanciones de la ONU. Si la primera de estas tendencias puede atribuirse a la adhesión a los presupuestos de la doctrina socialista del *colchón de intereses*, o incluso a la simple inercia (Marruecos no era objeto de ninguna mención expresa en el programa electoral de 1996), la apertura hacia Argelia y Libia sí ponía en evidencia el giro economicista impreso a la política exterior española (Feliu, 2005: 6, 17; Remiro Brotóns, 2004: 79, 90).

En el caso de Argelia, el Gobierno de Aznar optó en estos años por interpretar la violencia generalizada que asolaba el país desde el golpe de Estado militar de 1992 como una situación de guerra civil y no como mero producto del terrorismo islamista, como pretendía la versión oficial del régimen. Esto lo llevó hasta a abogar por una solución política basada en el diálogo del Gobierno argelino con todos los actores implicados, incluido el FIS (López García y Hernando de Larramendi, 2002: 179). Pero las reticencias hacia el régimen fueron desapareciendo tras la victoria de Abdelaziz Buteflika en las elecciones presidenciales de 1999, el fin del estado de excepción y la promulgación de la Ley de Concordia Civil (1999), medidas con las que se iniciaba la precaria estabilización del país. En julio de 2000, Aznar fue el primer jefe de Gobierno europeo en realizar una

visita oficial a Argelia desde 1992. Un mes más tarde se cerraba el protocolo de acuerdo entre Cepsa y Sonatrach para construir el nuevo gasoducto Medgaz, que conectaría directamente la zona de Orán con la costa de Almería, sin atravesar Marruecos como el gasoducto Magreb-Europa. No es fácil discernir si en la política magrebí de esta etapa predominaba una estrategia de equilibrio o global, teniendo en cuenta que la crisis argelina y el cierre de fronteras con Marruecos (1994) habrían impedido en todo caso la aplicación efectiva del segundo de estos enfoques. No obstante, en estos años España no utilizó en beneficio propio la rivalidad entre Marruecos y Argelia, y, si se acercó a este último país, fue principalmente por intereses económicos.

En el aspecto multilateral, aunque el programa electoral de 1996 afirmara que “la política europea para el Mediterráneo constituye el eje fundamental sobre el que debe articularse la política española para el área”, distintos observadores apreciaron cierta pérdida de interés o incluso un “período de hibernación” (Núñez Villaverde, 2001: 140) durante la primera legislatura de Aznar, sobre todo en comparación con el protagonismo asumido por el anterior Ejecutivo en la puesta en marcha del Partenariado Euromediterráneo (1995). En cualquier caso, este reajuste en el equilibrio entre los esfuerzos bilaterales y multilaterales, especialmente notorio en las relaciones con Marruecos (Gillespie, 2001: 22, 26), no dejaba de ser coherente con la voluntad declarada de recuperar la atención al bilateralismo, que este partido consideraba postergado en los últimos tiempos de González.

En definitiva, la política mediterránea de la primera legislatura del PP –como, en gran medida, también la del primer tramo de la segunda– fue fundamentalmente pragmática, y no alteró en lo esencial el diseño de los gobiernos precedentes, aunque sí evidenció cierta pérdida de fuelle y ocasionó un retroceso de la influencia española en el área. La menor prioridad de esta región quedó en evidencia en el programa electoral de 2000, en el que el espacio dedicado a ella se redujo de manera notable.

PUNTOS DE INFLEXIÓN

También parece un diagnóstico casi unánime que la política exterior de las dos legislaturas de Aznar no se desarrolló sin solución de continuidad, y que en algún momento se produjo una inflexión fundamental en su diseño. Muchos sitúan la ruptura en las elecciones generales de marzo de 2000, en las que el PP obtuvo la mayoría absoluta que le permitiría en adelante gobernar en solitario, sin depender de incómodas alianzas con fuerzas nacionalistas. En política exterior, 2000 fue un año de refuerzo del protagonismo presidencial debido a la creación del Consejo de Política Exterior (CPE), un órgano colegiado restringido destinado al asesoramiento directo del presidente¹. Pero,

por encima de todo, en este momento se hizo explícito el modelo revisionista que algunos han denominado de “cambio de estatus” (Jiménez Redondo, 2005), plasmado en el Plan Estratégico de Acción Exterior del ministerio dirigido por Josep Piqué y presentado como un proyecto ambicioso para que España adquiriera mayor protagonismo y prestigio internacional. Según Jiménez Redondo, esta nueva perspectiva “activa” sobre el papel de España en el mundo y la defensa de sus intereses nacionales, sucesora del “modelo de transición y consolidación democrática” desarrollado entre 1975 y 1996, tendría también un “claro carácter regenerador” por basarse “en la permanencia de ciertas reminiscencias de la condición de España como gran potencia” (2005: 57-60, 32).

También en la política bilateral hacia el Magreb se produjeron novedades significativas al principio de esta segunda legislatura del PP, empezando por el deterioro precipitado de la procelosa relación de vecindad con Marruecos. La crisis entre ambos países se iniciaría abiertamente un año más tarde, en abril de 2001, tras la negativa marroquí a renovar el acuerdo pesquero suscrito con la UE, que afectaba particularmente a intereses españoles. A partir de este momento se sucedieron las declaraciones de Aznar sobre las “consecuencias” que esta decisión tendría sobre las relaciones bilaterales; las acusaciones *in crescendo* del Ejecutivo español contra las autoridades marroquíes en relación con la inmigración ilegal (verano de 2001); el bloqueo por parte de Madrid de una posición común de la UE de apoyo al Plan Baker I sobre el Sáhara Occidental, favorable a Rabat; la organización de un referéndum simbólico de apoyo a la independencia saharauí por parte de ONG andaluzas; la llamada a consultas del embajador marroquí en España (octubre de 2001); las concesiones de sendas licencias de exploración petrolera por parte de Marruecos (Total Fina Elf) y España (Repsol-YPF) en espacios marítimos de soberanía disputada entre el Sáhara Occidental y las islas Canarias (noviembre de 2001 y enero de 2002); y la propuesta española en el Consejo Europeo de Sevilla de penalizar con una reducción de la cooperación a los países que no controlaran adecuadamente los flujos migratorios ilegales (junio de 2002). A esta sucesión de agravios mutuos no era ajeno, por añadidura, el ostensible acercamiento entre Madrid y Argel escenificado en estos momentos.

A pesar de todos estos cambios, el año 2000 representó un punto de inflexión más desde el punto de vista interno que en materia de política exterior. Hubo que esperar al último tramo de la legislatura (2002-2004), marcado por las polifacéticas consecuencias internacionales de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la acentuación de la presidencialización de la política exterior española y, como factor adicional, la crisis con Marruecos por el islote de Perejil, para que se apreciara en todo su calado el intento de puesta en práctica del modelo de cambio de estatus, con una decidida apuesta atlantista y una creciente ideologización de esta política.

Que el nuevo contexto internacional, originado en el 11-S, resultó determinante en la evolución de la política exterior del segundo Gobierno de Aznar, por encima de la mayoría absoluta de 2000 (Barreñada, Martín y Sanahuja, 2004: 11; Iglesias-Cavicchioli,

2007), es algo que confirma en cierto modo el propio Aznar cuando, en el capítulo de sus memorias dedicado a las cuestiones internacionales, inicia su relato precisamente en esta fecha, obviando la acción de su Gobierno en los cinco años y medio precedentes. En lo personal, el presidente relacionó de inmediato este atentado con su experiencia como víctima de ETA (Aznar, 2004: 143-144). Su Gobierno y su partido hicieron recuento de los ingratos esfuerzos desplegados durante años por España para promover la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, tanto en el plano bilateral como en el marco del *tercer pilar* de la UE (Asuntos de Interior y Justicia). En el Ministerio de Asuntos Exteriores se entendía que “la lucha antiterrorista constituye un pilar esencial, si no el más importante, de la política interior y exterior de España” (Sistiaga, 2003: 89).

El factor interno que confluyó con estas circunstancias fue la acentuación de la presidencialización de la política exterior, que alcanzaría su paroxismo con el apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak, fruto de una decisión personal del jefe del Ejecutivo tan sólo respaldada a posteriori por su Gobierno y su partido (Aznar, 2004: 150, 159). Tampoco fueron ajenos a esta evolución ni el anuncio del presidente de su decisión de no concurrir a las elecciones de 2004, realizado en el XIV Congreso Nacional del PP (enero de 2002), ni la crisis de Gobierno de julio del mismo año. En esta remodelación salieron de Exteriores el ministro Piqué y su secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miquel Nadal, para ser sustituidos, respectivamente, por Ana Palacio, considerada como una tecnócrata de perfil político bajo, y Ramón Gil-Casares, hasta entonces director del departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete de Presidencia, muy cercano a las posiciones de Aznar. Dentro del partido, en el congreso de enero, había tenido también lugar un relevo al frente de la Secretaría de Relaciones Internacionales, un órgano directamente dependiente de la Presidencia. El diplomático Jorge Moragas asumió las funciones que hasta entonces había desempeñado el sobrino del fundador de AP, José María Robles Fraga.

El clímax de la crisis con Marruecos tuvo lugar en julio de 2002 a raíz de la ocupación del islote de Perejil por parte de gendarmes de este país. Según la óptica elegida, este episodio puede ser visto como causa o como consecuencia del giro en ciernes de la política exterior española. En el primero de los supuestos, la escasa solidaridad hacia Madrid demostrada en una situación crítica por socios clave en la UE, como Francia, la ineficacia de los mecanismos de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), así como la intervención final del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, como *facilitador* de la resolución del conflicto, habrían servido a Aznar para confirmar sus filias y fobias personales (Barreñada, Martín y Sanahuja, 2004: 14) y habrían acelerado la recomposición de las alianzas de España en beneficio de Estados Unidos y en detrimento de la UE y Francia (Cembrero, 2006: 57; Planet y Hernando de Larramendi, 2006: 425-429). Con posterioridad, Aznar llegó a acusar al entonces presidente de la República francesa, Jacques Chirac, de sembrar cizaña durante la crisis hispano-marro-

quí (Cembrero, 2006: 10, 50). La hipótesis contraria –o complementaria– es que “la reestructuración de las prioridades de la política exterior, visible en otras áreas durante el segundo mandato de Aznar, se estuviera también planteando, con matices, en el Magreb” (Feliu, 2005: 4; Gillespie, 2006: 110).

Por último entraba en escena el elemento ideológico. Incluso observadores afines a sus planteamientos iniciales advierten que “el mundo de Aznar se cerró en torno a una visión casi obsesiva de la seguridad y a una consideración de España como potencia mundial y aliado preferencial de los Estados Unidos sobredimensionada”, lo que implicaba una “pérdida de realismo” (Jiménez Redondo, 2005: 132). Se iniciaba así, tras un largo período marcado por el pragmatismo, una etapa de politización de la política exterior española que se ha prolongado posteriormente tras la llegada al poder del PSOE en 2004 (Aixalà i Blanch, 2005: 89-90). La ideologización de los dos últimos años de Aznar –y particularmente su apoyo a la guerra de Irak– ha sido atribuida a la influencia sobre el propio presidente del neoconservadurismo estadounidense, una corriente definida por la combinación de idealismo neowilsoniano y unilateralismo que había logrado una notable influencia en la Administración Bush a partir del 11-S en detrimento de los sectores realistas tradicionales. Sus ideas habían sido difundidas en España por analistas como Bardají, entonces asesor de Aznar y subdirector del Real Instituto Elcano, y *think tanks* de derechas como la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y GEES (Iglesias-Caviccholi, 2007: 4, 14).

EL VIRAJE IDEOLÓGICO

Según algunos observadores, el viraje de la política exterior española manifiesto en el alineamiento con Washington y el alejamiento de la UE habría reducido su autonomía y su margen de acción en las dos vertientes complementarias de la europea: América Latina y el Mediterráneo. Si, desde la incorporación a la UE, los gobiernos socialistas habían consolidado una estrecha vinculación entre las dimensiones europea y mediterránea, en este momento habríamos asistido a su divorcio. El triángulo España-UE-Mediterráneo estaría siendo sustituido por el de España-Estados Unidos-Mediterráneo. Sin embargo, el alcance y las implicaciones de esta evolución son desiguales según el aspecto de esta política al que se preste atención.

En política bilateral, la ocupación de Perejil por parte de gendarmes marroquíes y la posterior intervención militar española, destinada a restablecer el *statu quo ante* y a volver a dejar el islote libre de ocupación militar, no sólo pusieron en evidencia las insuficiencias del *colchón de intereses* y el carácter voluble de una interdependencia

construida “sobre una agenda demasiado estrecha, principalmente económica, que no lograba abordar aspectos ‘difíciles’ de las relaciones tales como las diferencias de régimen y las tensiones culturales de raíz histórica” (Gillespie, 2006: 110). Este episodio dejó por primera vez traslucir algunas fisuras en el seno del Gobierno del PP. La decisión de intervenir militarmente “si era necesario” había sido tomada por Aznar desde el primer momento, aunque durante seis días se agotaran los esfuerzos diplomáticos para tratar de obtener la retirada marroquí o, en su defecto, el respaldo del Congreso, la UE y la OTAN (Aznar, 2004: 167; Trillo, 2005: 173-174, 179). Pero ministros como Palacio y el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, no compartían la inclinación al uso de la fuerza del sector representado por el titular de Defensa, Federico Trillo, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el propio presidente, cuya posición prevalecería finalmente (Remiro Brotóns, 2004: 93)².

Las desavenencias con Marruecos, una vez más, eran a un tiempo causa y efecto de la posición española sobre el conflicto del Sáhara Occidental y de la evolución de las relaciones con Argelia. En 2003, el lanzamiento de la nueva iniciativa para el Sáhara conocida como Plan Baker II, que logró la adhesión del Frente Polisario y el apoyo de Estados Unidos y fue adoptada en la resolución 1495 del Consejo de Seguridad, bajo presidencia española, allanó bastante el camino a la diplomacia de Madrid en relación con este dossier espinoso. Rabat siguió siendo la parte descontenta, ya que este proyecto sustituía al presentado en 2001, más próximo a sus intereses. Por su parte, la *luna de miel* con Argelia continuó con la sucesión de visitas recíprocas entre Aznar y Buteflika, la firma de un acuerdo de reconversión de deuda en inversión (marzo de 2002) y el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación (octubre de 2002). Todos estos movimientos de ficha fueron vistos como indicios del resurgimiento de la vieja política española de equilibrio e instrumentalización de las diferencias entre Marruecos y Argelia (López García y Hernando de Larramendi, 2002: 188; Feliu, 2005: 6). Pero tampoco se pueden descartar las motivaciones estrictamente económicas, las mismas que habían impulsado la normalización acelerada de las relaciones con Libia y llevado a Aznar a ser uno de los primeros líderes europeos en visitar en Trípoli a Muamar el Gadafi (septiembre de 2003).

En el aspecto multilateral, la dejadez reprochada al primer Gobierno del PP contrasta con el voluntarismo exhibido en el período 2002-2004, en el que se pretendió que España recuperara su liderazgo del Proceso de Barcelona y contribuyera a sacarlo de su letargo. Según algunos observadores, este compromiso no era ajeno a la pretensión de implantar los asuntos de Interior y Justicia dentro del tercer capítulo de este Partenariado Euromediterráneo, un objetivo en la línea de las prioridades de la presidencia española de la UE del primer semestre de 2002 –la lucha contra la inmigración ilegal y la cooperación internacional contra el terrorismo– que finalmente se materializó en la Conferencia de Valencia de abril del mismo año (Gillespie, 2002: 110-111). No obstante, en el Plan de Acción aprobado en dicha conferencia se incluían también novedades destacables

en los siguientes aspectos: institucional (constitución de una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea), económico (aprobación de una nueva línea de crédito para la región del Banco Europeo de Inversiones y firma del acuerdo de asociación UE-Argelia) y socio-cultural (creación de una fundación para el diálogo entre las culturas).

En todo caso, la complementariedad entre la vertiente bilateral y multilateral de la política española hacia esta región no podía sino resentirse de la brecha abierta con un socio europeo clave como Francia. La voluntad de diferenciarse de las posiciones de París se apreció sensiblemente en las relaciones bilaterales con el Magreb, en las que hasta entonces había prevalecido la coordinación. En general, la política mediterránea del PP en esta etapa no abandonó del todo el economicismo pragmático, pero sí incurrió en ciertos excesos ideológicos a raíz de la crisis con Marruecos y concedió una clara primacía a las cuestiones de seguridad. Así lo resumía el programa electoral del partido de 2004: “Debemos esforzarnos por construir una nueva conciencia de seguridad en torno a la política exterior de España. Nuestra seguridad se gana en la defensa de la libertad en todo el mundo. El vínculo transatlántico y su defensa es garantía para nuestra seguridad y la de toda Europa”.

UN PARTIDO, DOS DISCURSOS

Convencido de haber conseguido en sus ocho años de Gobierno “fortalecer la influencia y el peso de España en el escenario internacional”, el PP concurrió a las elecciones de marzo de 2004 con un programa en el que el Mediterráneo y el Magreb habían sido desplazados al cuarto puesto entre los ejes geográficos de la política exterior española (ahora tenían por delante la relación transatlántica) y en el que la lucha contra el terrorismo constituía el primero de los ejes temáticos. La inesperada victoria electoral del PSOE y los cambios inmediatos en política exterior introducidos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero trastocaron sin duda muchas de sus expectativas. Si desde 2003 se venía debatiendo sobre la ruptura del consenso entre los dos partidos políticos mayoritarios en esta materia, la cura de realidad de los años sucesivos ha conducido a una definitiva normalización de sus diferencias. Autores diversos coinciden en señalar que ambas formaciones tienen hoy visiones y proyectos muy distintos sobre el papel de España en el mundo y los intereses, objetivos e instrumentos de la política exterior española (Aixalà i Blanch, 2005: 94; Jiménez Redondo, 2005: 25).

Lo que esta idea de las “dos visiones” (Sahagún, 2005: 268) oscurece es que, en la actualidad, el propio discurso sobre política exterior del PP y su entorno dista mucho de ser monolítico. Desde su paso a la oposición se aprecia de manera bastante nítida una

bifurcación entre las posiciones más ideologizadas del sector próximo al pensamiento neoconservador, representado por el propio ex presidente y los analistas de la FAES y el GEES, y las que mantiene el sector eminentemente realista, dentro del que se cuentan buena parte de los representantes del partido en el Congreso y el Senado. La fundación FAES, nacida en 1989 del entorno político de Valladolid de Aznar y hegemónica en el partido desde que en 2002 absorbiera a todas sus competidoras –entre las que destacaba la Cánovas del Castillo, vinculada a Fraga–, ha mantenido en los últimos años contactos regulares con conocidos *neocons* como William Kristol o Nathan Sharansky. Su revista *Cuadernos de pensamiento político* ha seguido con atención la evolución y los temas recurrentes del pensamiento de esta corriente. Por lo demás, buena parte de sus colaboradores sobre cuestiones internacionales proceden del GEES, un *think-tank* privado y sin vinculación orgánica con el partido, pero que le suministra sus análisis desde sus orígenes (Bardají, 2007a: 7-12). En el campo contrario, el propio portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara alta, Arístegui, ha marcado expresamente sus distancias con respecto a los *neocons* estadounidenses, a los que considera como “los extremistas entre nuestros aliados” (Woodworth, 2004: 20); otros insisten en la vigencia del concepto de interés nacional y el realismo político a la manera de Henry A. Kissinger (Muñoz-Alonso, 2006: 142).

En relación con el Mediterráneo, ambos discursos coinciden en situar como prioridad actual la amenaza del islamismo y el terrorismo. Hay diferencias, no obstante, entre las especulaciones de Bardají sobre la inminente instauración del califato en Europa (2006: 185) y las tesis más elaboradas de Arístegui. Este último establece también un vínculo más o menos directo entre el “islamismo”, entendido como “ideología totalitaria”, y las manifestaciones terroristas, pero admite que algunas formas de “islam político” como la representada por los Hermanos Musulmanes egipcios no tienen por qué ser de entrada ilegítimas (2003: 117). Otro diputado destaca que, en el caso de partidos islamistas reformistas integrados en los sistemas políticos de sus respectivos países, “el trabajo y la oportunidad es doble”: consolidar el proceso de “democratización incipiente” y al mismo tiempo “conseguir que estas formaciones en ningún caso abandonen las reglas del juego y las pautas exigibles a cualquier partido democrático” (entrevista).

En la lucha contra el terrorismo, Arístegui considera imprescindible aumentar la cooperación internacional y fomentar “la estabilidad, la prosperidad y la libertad” en el mundo islámico en general y especialmente en los países vecinos. Es decir, “desactivar la bomba de relojería por medios pacíficos, de cooperación y con el diálogo” (2000: 229-230). Algo que tiene poco que ver con la doctrina del cambio de régimen que propugna el enfoque *neoon* sobre la promoción de la democracia (Bardají, 2007b: 33-34)³. Desde la posición realista se da prioridad a la estabilidad del Magreb y Oriente Próximo y se insiste en los riesgos que conllevaría “una imposición cruda y sin matices” de la “democracia de corte occidental”. Esto, es cierto, implica también admitir que ciertas

“democracias tuteladas” pueden constituir “un necesario primer paso para la adecuación del sistema a las características de la sociedad en la que pretende asentarse” (Aristegui, 2000: 210). O, incluso, que conviene preservar las alianzas tradicionales con “regímenes muchas veces moderados, otras veces no tanto, pero que sin duda tienen peores alternativas que las actualmente en curso” (Aristegui, 2003: 111-112).

Dentro de la agenda bilateral, el conflicto del Sáhara Occidental se ha convertido en uno de los temas predilectos del partido y es actualmente objeto de un amplio consenso. En 2004, el programa electoral del PP reiteraba su adhesión a la postura española ya asentada de apoyo a una solución en el marco de Naciones Unidas. La llegada del PSOE a la Moncloa no tardó en detonar las alarmas sobre la “previsible” alteración de la política española en este dossier, justo en el momento en que Marruecos debía pronunciarse definitivamente sobre el Plan Baker II, aprobado por el Consejo de Seguridad un año antes (Ruiz Miguel, 2007: 144-145). El apoyo a los nuevos planes de Rabat, que prevén la autonomía del territorio bajo soberanía marroquí y dan por enterrada la iniciativa anterior, ha sido interpretado de manera unánime como un abandono injustificado de las posiciones tradicionales españolas. Además de destacar las dificultades que acarrea al Gobierno de Rodríguez Zapatero (Carnero y Sarias, 2007: 2-4), desde la línea más dura se advierte que esta postura perjudica directamente a los intereses nacionales españoles (Ruiz Miguel, 2007: 147) y se aboga sin ambages por la independencia del territorio saharauí (Ruiz Miguel, 2006: 152).

Las divergencias son mayores a la hora de definir las respectivas concepciones de las relaciones con el Magreb en su conjunto. Mientras que unos no dudan en reconocer que los gobiernos del PP patrocinaron en esta región una “política de equilibrio” más favorable a Argelia que a Marruecos (Bardají y Portero, 2007: 6) y criticar el “discurso promarroquí de la ‘estabilidad’” asociado al PSOE (Ruiz Miguel, 2006: 160), otros aseguran que “siempre ha habido una política magrebí que considera al Magreb como una unidad” y “todos los gobiernos democráticos han actuado como si la estabilidad del norte de África fuera prioritaria para España” (Aristegui en *Afkar/Ideas*, 2004: 48). Unos ven a Argelia como un socio ineludible por su peso económico y político en todo el continente africano, y más fiable y estable para España debido a la ausencia de problemas históricos bilaterales. Y otros, autodefinidos como liberales, insisten en que “cada vez tendemos más hacia las soluciones regionales” y “en zonas en las que existen muchas interrelaciones entre los países hay que trabajar cada vez más con una visión global”. Para estos últimos, tanto Marruecos como Argelia “son socios geoestratégicos de primer nivel para España y con los dos hay que mantener excelentes relaciones” sin dar prioridad a ninguno de ellos (entrevistas).

Marruecos, en particular, es descrito desde el sector más duro como un país necesitado de un “cambio radical” en el sistema político (entrevista), cuya inestabilidad interna se debe ante todo a “la tiranía y la corrupción” y cuyo “proyecto imperialista” está en el

origen de la inestabilidad regional, incluso del terrorismo islamista argelino (Ruiz Miguel, 2006: 155-162). Los realistas, por el contrario, ven el vaso medio lleno y tienden a destacar la importancia de la “estabilidad” y los “desarrollos positivos en los planos económico y político” registrados en Marruecos. En una entrevista reciente en *As-Sharq al-Awsat* (1/8/2007), Arístegui se declaraba partidario de “proseguir la edificación de una red de intereses recíprocos entre Marruecos y España en los terrenos económico, comercial, financiero, político y cultural, así como en materia de lucha contra el terrorismo”, y aseguraba que las relaciones entre Madrid y Rabat “no se resentirán en absoluto de un retorno del PP al poder”. La prioridad estratégica otorgada a este país lo llevaba hasta el punto de defender que las relaciones con él sean tratadas como una cuestión de Estado y aisladas de los debates políticos internos.

Más allá de los discursos, lo cierto es que en los últimos años han aumentado los esfuerzos del partido por superar su carencia de lazos estables con fuerzas políticas representativas de los países de la orilla sur del Mediterráneo, un punto flaco del que el PSOE sacó partido en su momento para tratar de deslegitimar al Gobierno del PP (López García y Hernando de Larramendi, 2002: 188). Hasta ahora, su interés ha estado centrado en las formaciones ideológicamente afines integradas en la Internacional Demócrata de Centro (IDC), situación en la que sólo se encuentran dos socios magrebíes: el Partido del Istiqlal (PI) marroquí, nacionalista histórico y vencedor de las últimas elecciones legislativas de su país, con el que se mantienen relaciones fluidas a pesar de las diferencias insalvables sobre Ceuta y Melilla o el Sáhara Occidental⁴; y la Unión para la Democracia y el Progreso (UDP) mauritana, que actualmente apoya al nuevo presidente Sidi Ould Sheikh Abdullahi⁵. El PP pretende añadir a esta nómina a la Agrupación Nacional Democrática (RND) argelina del ex primer ministro Ahmed Ouyahia, cuya adhesión a la IDC está en proceso de negociación. Al margen de esta internacional, sólo se mantienen contactos regulares con el Frente Polisario a través del representante permanente de éste en Madrid, Brahim Ghali.

Más recientemente, iniciativas como la visita de Arístegui a Marruecos, tras las elecciones legislativas celebradas en este país en septiembre de 2007, durante la que se reunió con el ministro delegado de Asuntos Exteriores de este país, Taieb Fassi Fihri, y dirigentes de los cinco primeros partidos con representación parlamentaria (PI, Partido Justicia y Desarrollo, Movimiento Popular, Reagrupación Nacional de Independientes y Unión Socialista de Fuerzas Populares), parecen indicar que, con vistas a las elecciones generales de 2008 y un hipotético regreso a la Moncloa, el partido habría optado por retornar a la senda del pragmatismo por la que discurrieron en sus primeros tiempos tanto su discurso como su acción de gobierno.

Notas

1. El Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, por el que se constituyó el CPE, ha sido recientemente modificado por el Real Decreto 1389/2007, de 29 de octubre. El objetivo declarado es reformar en profundidad este órgano y adaptarlo a la estructura actual del Gobierno.
2. Casimiro G. Abadillo: "¿Vecino o enemigo del sur?". *El Mundo* (28.07.2002). Véase también Cembrero (2006: 34, 36, 37).
3. En el congreso del PP de 2004 se proponía convertir la promoción de la democracia en una "parte esencial de la acción exterior española" y se defendía la compatibilidad entre la Iniciativa para el Gran Oriente Medio (Greater Middle East Initiative) de Estados Unidos y la Asociación Euromediterránea (Nadal y Matos, 2004: 10, 24).
4. Tres miembros del PI asistieron como invitados al 15º Congreso del PP, en septiembre de 2004. El secretario general del PI, Abbas El Fassi, visitó en febrero de 2007 la sede central del PP en Madrid, donde fue recibido por su presidente, Mariano Rajoy. Véase http://www.istiqlal.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=47&idparent. "Le Parti Populaire espagnol et la diplomatie partisane de Istiqlal". *L'Opinion* (03.08.2007) <http://www.lopinion.ma/spip.php?article16256>. El mismo Rajoy felicitó al PI tras la difusión de los resultados de los comicios celebrados el 7 de septiembre de 2007. El jefe de campaña istiqlalí y nuevo ministro de Asuntos Económicos y Generales, Nizar Baraka, aseguró que esta victoria reforzará sus relaciones con el partido conservador español. Véase de Vega, Luis. "Los 'hermanos' marroquíes del Partido Popular". *ABC* (09.09.2007).
5. El PP valora positivamente la evolución política seguida por Mauritania tras el golpe de Estado que provocó la caída del régimen de Maaouya Ould Sid Ahmed Taya en agosto de 2005 y el papel del nuevo presidente, Sidi Ould Sheikh Abdullahi. Tras el golpe militar, abogó en el Parlamento Europeo por establecer una comisión de seguimiento de este país en lugar de imponerle sanciones.

Referencias bibliográficas

- AIXALÀ I BLANCH, Albert. "La política exterior española ante los retos de su politización: del consenso a la legitimidad". *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*. No. 69 (mayo de 2005). P. 89-105.
- Afkar/Ideas*. No. 2 (marzo de 2004). "El Magreb, prioridad política, estratégica y económica para España. Los dos principales partidos políticos españoles coinciden en la importancia estratégica de Marruecos".. P. 47-55.
- ARÍSTEGUI, Gustavo de. "Nuestra postura ante los conflictos cercanos, Oriente Medio, Balcanes, terrorismo y narcotráfico". En: AA. VV. *España, un actor destacado en el ámbito internacional*. Madrid: FAES, 2000. P. 181-247.

- “El nuevo terrorismo y las nuevas amenazas”. En: VALLE GÁLVEZ, Alejandro del (ed.). *Los nuevos escenarios internacionales y europeos del derecho y la seguridad*. Madrid: Escuela Diplomática/Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales/Boletín Oficial del Estado, 2003. P. 109-124.
- AZNAR, José María. “Principales problemas que afectan a Sur de Europa. Política de seguridad y cooperación en el Mediterráneo”. En: AA. VV. *El fundamentalismo islámico*. Madrid: Fundación Cánovas del Castillo, 1992. P. 89-100.
- *Presente y futuro de España en el mundo*. Madrid: INCIPE, 1996.
- “Pour une Espagne qui s’engage”. *Politique internationale*. No. 100 (verano de 2003).
- *Ocho años de gobierno. Una visión personal de España*. Barcelona: Planeta, 2004.
- BALFOUR, Sebastian. “The Reinvention of Spanish Conservatism. The Popular Party since 1989”. En: BALFOUR, Sebastian (ed.). *The Politics of Contemporary Spain*. Londres: Routledge, 2005. P. 146-168.
- BARDAJÍ, Rafael L. *España en el nuevo entorno estratégico*. Madrid: INCIPE, 1992.
- “El mundo en el 2025. Un escenario de futuro”. *Cuadernos de pensamiento político*. No. 11 (julio-septiembre de 2006). P. 185-192.
- “Introducción”. En: GEES. *Qué piensan los ‘neocon’ españoles. 20 años de análisis estratégico*. Madrid: Ciudadela, 2007a. P. 7-21.
- “Una visión neoconservadora del mundo de hoy”. En: GEES. *Qué piensan los ‘neocon’ españoles. 20 años de análisis estratégico*. Madrid: Ciudadela, 2007b. P. 29-41.
- BARDAJÍ, Rafael L. y PORTERO, Florentino. “La España menguante... menguada”. *Papeles FAES*. No. 39 (2007).
- BARREÑADA, Isaías ; MARTÍN, Iván y SANAHUJA, José Antonio. “L’Espagne et la guerre en Iraq (2002-2004): ruptures dans la politique extérieure”. *Critique internationale*. No. 23 (abril de 2004). P. 9-21.
- CARNERO, Alberto y SARIAS, David. “Sáhara Occidental: deslealtad, dejación... o responsabilidad”. *Papeles FAES*. No. 46 (2007).
- CEMBRERO, Ignacio. *Vecinos alejados. Los secretos de la crisis entre España y Marruecos*. Madrid: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2006.
- FELIU, Laura. “España y el Magreb durante el segundo mandato del Partido Popular. Un periodo excepcional”. FRIDE. *Documento de trabajo*. No. 9 (mayo de 2005).
- FERRÉ, José María. “El Mediterráneo: nuestro origen y nuestra proximidad”. En: AA. VV. *España, un actor destacado en el ámbito internacional*. Madrid: FAES, 2000. P. 71-102.
- GILLESPIE, Richard. *Spain and the Mediterranean. Developing a European Policy towards the South*. Basingstoke: Macmillan, 2000.
- “Spain and the Western Mediterranean”. Economic & Social Research Council. *Working Paper*. No. 37/01 (2001).
- “The Valencia Conference: Reinvigorating the Barcelona Process?”. *Mediterranean Politics*. Vol. 7. No. 2 (verano de 2002). P. 105-114.
- “‘This Stupid Little Island’: A Neighbourhood Confrontation in the Western Mediterranean”. *International Politics*. Vol. 43. No. 1 (febrero de 2006). P. 110-132.

- HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel. "La politique étrangère de l'Espagne envers le Maghreb. De l'adhésion à l'Union européenne à la guerre contre l'Iraq (1986-2004)". En: *L'Année du Magreb 2004*. París: CNRS, 2006. P. 27-43.
- HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel y NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús A. *La política exterior y de cooperación de España en el Magreb (1982-1995)*. Madrid: IUDC/Los Libros de la Catarata, 1996.
- IGLESIAS-CAVICCHIOLI, Manuel. "A Period of Turbulent Change: Spanish-US Relations Since 2002". *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*. Vol. 8, No. 2 (verano-otoño de 2007). P. 1-17.
- JIMÉNEZ REDONDO, Juan Carlos. *De Suárez a Zapatero: La política exterior de la España democrática*. Madrid: Dilex, 2006.
- LÓPEZ GARCÍA, Bernabé y HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel. "Spain and North Africa: Towards a 'Dynamic Stability'". *Democratization*. Vol. 9. No. 1 (primavera de 2002). P. 170-191.
- MUÑOZ-ALONSO, Alejandro. "Política exterior e interés nacional". *Cuadernos de pensamiento político*. No. 10 (abril-junio de 2006). P. 133-144.
- *España en primer plano. Ocho años de política exterior (1996-2004)*. Madrid: Gota a Gota, 2007.
- NADAL, Dolors; MATOS, Pablo. "España en el mundo". Ponencia presentada en el XVº Congreso Nacional del PP, Madrid, octubre de 2004.
- NÚÑEZ VILLAVERDE, Jesús A. "The Mediterranean: A Firm Priority of Spanish Foreign Policy?" En: GILLESPIE, Richard y YOUNGS, Richard (eds.). *Spain: The European and International Challenges*. Londres: Frank Cass, 2001. P. 129-147.
- PLANET, Ana I. y HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel. "Una piedra en el camino de las relaciones hispano-marroquíes: la crisis del islote de Perejil". En: PLANET, Ana I. y RAMOS, Fernando (eds.). *Relaciones hispano-marroquíes: Una vecindad en construcción*. Madrid: Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, 2006. P. 403-430.
- REMIRO BROTONS, Antonio. "La politique étrangère". En: MODERNE, Franck y BON, Pierre (dirs.). *Espagne: les années Aznar*. París: La Documentation Française, 2004. P. 75-106.
- RUIZ MIGUEL, Carlos. "Sáhara Occidental: independencia, paz y seguridad". *Cuadernos de pensamiento político*. No. 12 (octubre-diciembre de 2006). P. 151-179.
- "La conveniencia de repensar el giro de nuestra política exterior". En: GEES (2007). P. 141-148.
- RUPÉREZ, Javier. *Continuidad y cambio en la política exterior española*. Madrid: INCIPE, 1996.
- SAHAGÚN, Felipe. "Política exterior y de seguridad de España en 2004". En: *Anuario internacional CIDOB 2004*. Barcelona: CIDOB, 2005. P. 265-281.
- SISTIAGA, Gabriel. "Terrorismo y seguridad internacional en Europa". En: VALLE GÁLVEZ, Alejandro del (ed.). *Los nuevos escenarios internacionales y europeos del derecho y la seguridad*. Madrid: Escuela Diplomática/Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales/Boletín Oficial del Estado, 2003. P. 87-92.
- SOLER I LECHA, Eduard. "Luces y sombras de la política mediterránea de Aznar". En: *Especial España en Europa 1996-2004*. Barcelona: Observatori de Política Exterior Europea-Institut Universitari d'Estudis Europeus, 2004.
- http://selene.uab.es/_c_iuee/catala/obs/working_ocasionals_archivos/Espana_Europa/Especial_EE.htm.

TRILLO, Federico. *Memoria de entreguerras*. Barcelona: Planeta, 2005.

VALENCIA, Manuel María. "España y la diplomacia económica". En: AA. VV. *España, un actor destacado en el ámbito internacional*. Madrid: FAES, 2000. P. 303-331.

WOODWORTH, Paddy. "Spain Changes Course. Aznar's Legacy, Zapatero's Prospects". *World Policy Journal*. Vol. 21, No. 2 (verano de 2004). P. 7-26.